

C Columna

No basta con desalojar

José Luis Navarro

Ingeniero Civil Industrial / Magíster en Políticas Públicas y Gobernanza Territorial



El anuncio de desalojos de campamentos en Antofagasta, realizado por el alcalde tras la visita presidencial, vuelve a instalar una discusión urgente, pero también incómoda. La ocupación irregular de terrenos no puede normalizarse, pero tampoco puede analizarse al margen del problema que la origina: la incapacidad del sistema formal para garantizar acceso suficiente y asequible a la vivienda y al suelo urbano.

En esa tensión se juega una parte importante del debate público. Una cosa es afirmar que el Estado debe resguardar la legalidad sobre los terrenos, especialmente cuando se trata de suelo fiscal, y otra muy distinta es

presentar el desalojo como si fuera, por sí mismo, una solución habitacional. Confundir ambas dimensiones empobrece la discusión y arriesga transformar una medida reactiva en una falsa respuesta de fondo.

Antofagasta no enfrenta un fenómeno marginal. Según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de TECHO-Chile, la comuna concentra el 8,1% de los campamentos del país y el 8,8% de las familias que viven en ellos, ubicándose entre los principales focos nacionales del problema. La región, además, registra 79 campamentos agrupados en 6 macrocampamentos. Estos datos no hablan solo de informalidad urbana, sino de una falla

“Antofagasta necesita una discusión menos simbólica y más estructural. No basta con afirmar que los campamentos son ilegales si no se aborda por qué siguen creciendo”.

persistente en la capacidad de producir ciudad bajo reglas de acceso más equitativas.

La situación se vuelve aún más preocupante al observar el desempeño de la respuesta pública. Aunque el Plan de Emergencia Habitacional cumplió su meta nacional, en Antofagasta persisten brechas importantes. El tercer reporte de avances del plan en campamentos, elaborado por TECHO, muestra que la región registra apenas un 35,7% de avance respecto de su meta, uno de los desempeños más bajos del país.

Desde esa perspectiva, insistir en el desalojo como eje del debate puede resultar políticamente rentable, pero técnicamente insuficiente. Los campamentos no aparecen solo por ausencia de control. Surgen también cuando la oferta habitacional no res-

ponde a la demanda, cuando el precio del suelo se vuelve prohibitivo, cuando los arriendos expulsan a los hogares de menores ingresos y cuando los subsidios pierden eficacia en mercados altamente tensionados. En una ciudad como Antofagasta, la informalidad deja de ser una anomalía excepcional y pasa a convertirse en una salida de hecho para miles de familias.

Pero también cabe una pregunta adicional: ¿es esta una decisión eficiente en términos de costos públicos? Si una familia es desalojada y no existe una alternativa real de integración habitacional, el problema no desaparece, solo cambia de lugar. En ese escenario, el Estado podría terminar destinando recur-

sos a una medida de alto costo operativo, social e institucional, sin resolver la causa del problema. Resulta legítimo preguntarse si no sería más eficiente invertir en habilitación de suelo, incentivos a la vivienda social y mecanismos que permitan ampliar la oferta formal en zonas bien localizadas.

Antofagasta necesita una discusión menos simbólica y más estructural. No basta con afirmar que los campamentos son ilegales si no se aborda por qué siguen creciendo en una ciudad donde el acceso a la vivienda formal se ha vuelto crecientemente difícil. En ese contexto, el desalojo puede ser una herramienta excepcional, pero no una política habitacional. ☞